

dades civiles o ante un ministro no católico, debiendo ser observadas las disposiciones del c. 810 § 1, n° 3 del CCEO. En cuanto al impedimento de parentesco legal, se mantiene en el Código oriental, a diferencia del Código latino.

Finalmente, el tercer punto de este capítulo examina la legislación sobre el matrimonio bajo condición. En el Código oriental (c. 826), el matrimonio no puede ser celebrado válidamente bajo condición. Teniendo presentes las legislaciones divergentes, la eficacia del consentimiento dependerá del derecho propio de la parte que ha contraído matrimonio bajo condición.

Vamos así a la segunda parte del trabajo del Prof. Prader, que aborda los problemas inter-confesionales e inter-religiosos (pp. 45-96). La legislación en vigor se ha innovado seriamente, en relación al CIC de 1917, decidiendo que «el matrimonio de los católicos, incluso si una parte solamente es católica, está regulado por el Derecho canónico» (c. 1059 del CIC, c. 780 § 1 del CCEO). Los bautizados no católicos no están ya sometidos a las leyes puramente eclesásticas. De ahí una laguna grave del Código latino, que no precisa las normas que rigen el matrimonio de los bautizados no católicos. Laguna colmada por los cc. 780 § 2 y 781 del CCEO. En cuanto a los no bautizados, su matrimonio sigue las leyes del Estado.

El autor estudia la aplicación concreta de los cc. 780 § 2 y 781, antes mencionados, al matrimonio entre una parte católica y una parte bautizada no católica oriental; entre dos partes bautizadas no católicas de rito oriental y entre una parte bautizada no católica oriental y una parte protestante; entre

una parte bautizada no católica de rito oriental y una parte no bautizada; entre dos partes bautizadas no católicas de rito oriental, celebrado en presencia de un sacerdote católico oriental; entre una parte católica y una parte no bautizada; entre una parte católica de rito latino y una parte católica de rito oriental, que se han separado de la Iglesia por un acto formal; entre protestantes o entre una parte protestante y una parte no bautizada; entre dos partes no bautizadas.

En la conclusión (pp. 97-100), el autor afirma que, en su apertura ecuménica y en conformidad con los derechos fundamentales de toda persona humana, de todo bautizado y de cada Iglesia, el Código oriental reconoce a las Iglesias y a las comunidades eclesiales no católicas el derecho a organizar el matrimonio de sus fieles según su derecho propio, respetando el Derecho divino. El legislador reenvía formalmente al sistema jurídico extranjero en los cc. 780 § 2 y 781. De ahí la necesidad de conocer las legislaciones religiosas y civiles en materia matrimonial, lo que requiere un estudio comparativo apropiado en las Facultades de Derecho canónico y en los Seminarios.

Una bibliografía esencial (pp. 101-102) pone punto final a esta interesante obra del Prof. Prader

DOMINIQUE LE TOURNEAU

María J. ROCA, *Naturaleza jurídica de los convenios eclesiásticos menores*, EUNSA, Pamplona 1993, 248 pp.

El objeto que persigue la autora de este estudio es la *elaboración de la natu-*

raleza jurídica e integración en el sistema de fuentes de los convenios de desarrollo de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (p. 24). Se centra en las manifestaciones jurídicas que adoptan la expresión de pacto formal entre partes civiles y confesionales, en desarrollo de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español.

Una de las cuestiones que mayor dificultad presenta a la hora de estudiar los presentes acuerdos, es que, siendo manifestaciones de desarrollo de unos acuerdos internacionales, sin embargo, en la mayoría de los supuestos, los sujetos que intervienen son distintos de la Santa Sede y el propio Estado. Además, y aunque su origen es pacticio, su publicación se hace normalmente mediante normas de carácter unilateral.

El punto de partida de la monografía es el análisis del marco jurídico de referencia de los convenios eclesiásticos de Derecho interno. Se analiza el principio constitucional de cooperación y sus manifestaciones prácticas concretas. En efecto, la primera de esas manifestaciones fue la firma de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español el 28 de julio de 1976 —y por lo tanto este Acuerdo sea anterior a la Constitución de 1978— y el 3 de enero de 1979. En los citados Acuerdos hay abundantes referencias a ulteriores pactos de desarrollo de las normas allí contenidas. Esos convenios menores en la práctica han puesto de relieve una notable variedad, tanto por razón de las materias, como por razón de los sujetos parte.

Una vez visto el marco en el que se desenvuelven los convenios objeto de estudio se entra a analizar —con riguroso apego al Derecho vigente— su natu-

raleza jurídica. Particular interés reviste la conclusión contenida en el capítulo II donde la autora se pronuncia a favor de la calificación *administrativa de los convenios eclesiásticos* (p. 148), si bien con notables *peculiaridades* (cfr. pp. 149-150). Esto le lleva a atender, en primer término, al compromiso de las partes y, más tarde, a la forma de publicación.

En todo caso, cabe calificar estos acuerdos como convenios de Derecho interno español. De los que han sido publicados hasta la fecha en nuestro país la autora destaca lo siguiente:

—la práctica totalidad de los convenios a nivel estatal y autonómico han sido firmados por autoridades que se integran en un órgano colegiado de gobierno.

—los citados órganos superiores de Gobierno son a la par órganos del Poder ejecutivo (ya sea estatal, ya autonómico) y de la Administración (estatal, o autonómica) en su condición de organización personificada.

A la hora de encuadrar jurídicamente dichos acuerdos es preciso tener presente que tan sólo merece ser calificado como acto de carácter internacional el *Acuerdo sobre aplicación del Impuesto sobre Sociedades* a Entidades Eclesiásticas, por el procedimiento empleado, ya que fue firmado por un representante de la Nunciatura y un representante del Estado Español. En los demás casos se siguió un procedimiento distinto; por tanto *no puede estimarse, por este título, derivados del Derecho Constitucional directamente y exceptuados del Administrativo* (p. 107).

Por lo que se refiere a los convenios eclesiásticos de ámbito autonómico su

fuerza vinculante deriva del Estatuto de Autonomía correspondiente —al igual que la fuerza vinculante de los estatales deriva de la Constitución—.

En síntesis, y aunque —como se ha dicho— la autora se pronuncia a favor de la calificación administrativa de los convenios eclesiásticos, también manifiesta con claridad que *si la constitución de tales convenios entraña una decisión política o entra dentro de la discrecionalidad administrativa, es una cuestión muy difícil de perfilar. Ni siquiera en el Derecho Administrativo o Constitucional, el problema de los límites entre la actividad política y la administrativa ha sido resuelto* (p. 148).

El Capítulo III profundiza en el análisis de la naturaleza jurídica de estos convenios desde la perspectiva del Derecho Administrativo en tanto uno de los sujetos parte se rige, precisamente por las normas de este sector del ordenamiento.

La conclusión que se deriva del trabajo es que se hace necesaria una *normativa general* (en otro momento la hemos llamado «Ley-marco») que establezca las garantías del principio '*pacta sunt servanda*' para las obligaciones públicas contraídas como consecuencia de los convenios eclesiásticos de Derecho interno, que originan propias normas reglamentarias de sanción unilateral y que precise con claridad hasta dónde llega el pacto: *éste es fuente de la norma, en cuanto compromete a la Administración a dar un reglamento o sancionar al convenio como norma propia reglamentaria* (p. 179).

Finalmente, el tema es analizado desde la perspectiva canónica, aunque, de una manera sumaria y breve, pero necesaria para tener la visión de conjunto.

Como conclusión, quiero simplemente destacar el abundante acopio normativo y el método —rigurosísimo— con el que ha sabido trabajar la Prof. Roca, adentrándose en una cuestión novedosa en nuestro sector del ordenamiento y en la que, obviamente, la bibliografía es escasa.

Suscribo plenamente las palabras de De Diego-Lora que aparecen en el prólogo de este libro: *se presenta, pues, como una aportación que desde el Derecho eclesiástico se proyecta a un horizonte jurídico más dilatado que pertenece, por su prestancia, a la Teoría General del Derecho*.

MARÍA BLANCO

Gustave THILS, *Le statut de l'Église dans la future Europe Politique*, Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, Faculté de Théologie, Louvain-la-Neuve 1991, 108 pp.

El profesor Thils es de sobra conocido como experto en las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política. En efecto, al menos desde el Concilio Vaticano II, donde tomó parte activa en la redacción de *Gaudium et spes*, no ha dejado de interesarse por la cuestión.

La introducción indica con nitidez cuál es el intento y la metodología del trabajo (pp. 6 y 7). El intento es contribuir a responder a la siguiente pregunta: de cara a la nueva Europa que estamos construyendo, ¿cuál puede ser el estatuto jurídico de la Iglesia en esa Europa del futuro? La metodología consiste en estudiar el magisterio pontificio